

La corrupción de la clase política tiene una vieja historia en América Latina (recuérdense los escándalos protagonizados por Jaime Lusinchi en Venezuela, o las acusaciones que recaen sobre quien gobernara a Bolivia durante el decenio pasado, Luis García Meza, de quien se dice que convirtió al narcotráfico en una "función del Estado"). Los gobiernos y las sociedades latinoamericanas habían convivido en relativa armonía con la desviación de dineros públicos, las transacciones indebidas, los favores del Estado a particulares, y todas las formas de corrupción de que es capaz la peculiar dupla geográfica compuesta por las zonas calientes tropicales y las alturas andinas. Pero -señal de que los tiempos cambian- las elecciones de los alcaldes cívicos en Colombia, la operación "Manos Limpias" en Ecuador, las revocatorias y juicios a presidentes

no había colaborado con la CIA), en una cruzada moral de rechazo al poder del narcotráfico que gobernaba ese país. Para efectos del juicio de Noriega, las palabras del narcotraficante Carlos Lehder adquirieron carácter testimonial para la justicia norteamericana, que juzgó a Noriega por cargos de narcotráfico y lavado de dinero -en intercambio de lo cual Lehder obtuvo beneficios en su condena-.

De manera paralela, en el Perú Alberto Fujimori logró ganar sorpresivamente las elecciones en su país, después de atacar el gobierno corrupto de Alan García (cuya situación jurídica es aun hoy incierta, aunque después de la solicitud de extradición por parte del Perú, probablemente no podrá seguir en calidad de *refugiado político* en Colombia). Aun más: la razón invocada por Fujimori para celebrar su "pronunciamiento" el 5 de abril de

Pérez. Este último fue acusado posteriormente de malversación y enriquecimiento ilícito; la Corte Suprema inició un proceso por corrupción, ante lo cual Pérez no tuvo más remedio que entregar el poder al presidente del Senado en mayo de 1993. Su juicio aun no concluye (aunque actualmente está bajo detención domiciliaria) -y, simultáneamente, el coronel Chávez ha gozado de una inusitada publicidad desde entonces. En Venezuela la crisis de la clase política tradicional fue capitalizada por Causa Radical, grupo político que se ha convertido en la segunda fuerza electoral en ese país.

Otro escándalo que tuvo consecuencias dramáticas para el presidente de turno fue el que involucró a Fernando Collor de Melo en el Brasil, entre 1992 y 1993. Acusado, entre otros, por su hermano Pedro de corrupción, tráfico de influencias y favores políticos durante la campaña electoral de 1990, el presidente afrontó una investigación de la Comisión Parlamentaria Investigadora y una gran oposición por parte de los medios y por sectores de la opinión pública. Finalmente, Collor de Melo tuvo que renunciar (asumió el cargo el vicepresidente Itamar Franco) y el Senado brasileño le suspendió sus derechos políticos hasta el año 2001.

Más recientemente, los casos de México y Ecuador reflejan la fragilidad de las antiguas alianzas del poder: el ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari se encuentra en Canadá, en calidad de lo que la prensa mexicana ha llamado un "exilio forzoso". Después del asesinato de Luis Donaldo Colosio el año pasado, de Francisco Ruiz Massieu, hermano del ex subprocurador, y del cardenal Juan Jesús Posada, se ha revelado la corrupción en las más altas esferas del poder. El ex presidente y su hermano Raúl salen mal librados de su experiencia en el Partido Revolucionario Institucional, que hoy aparece como un gran aparato burocrático de distribución de favores y venganzas personales. Para la prensa mexicana, paradójicamente, "México se colombianiza".

En Ecuador, finalmente, en octubre pasado le fue dictado auto de detención por la Corte Suprema al vicepresidente

Narcotráfico y corrupción,

Un Coctel Explosivo

OLGA LUCÍA GONZÁLEZ

corruptos indican que la década del noventa -y probablemente la próxima década también -serán recordados como los años de la ruptura definitiva.

La lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico fueron bien recibidas por los años noventa -si bien es cierto que la cuestión empezó un poco antes. El 20 de diciembre de 1989, casi de manera simultánea con las fiestas de recibimiento a la nueva década, los Estados Unidos invadieron el Panamá de Manuel Antonio Noriega (que anta-

1992 fue la de atacar "la corrupción del Estado a todos los niveles". Corrupción que a su vez fue denunciada por la esposa del presidente, Susana Higachi, en un escándalo que tuvo más elementos de agotamiento marital que de agotamiento político (este año Fujimori logró ser reelegido en la primera magistratura por una amplia votación).

Fue en ese mismo año de 1992 cuando se produjo la intentona de golpe del coronel Hugo Chávez y otros oficiales en contra del presidente Carlos Andrés

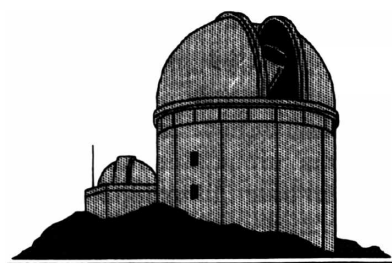
de ese país, Alberto Dahik, quien había salido bien librado en su juicio por corrupción ante el Congreso. Curiosamente, sin embargo, su reemplazo en el cargo (Eduardo Peña, elegido por el Congreso), había sido cuestionado hace dos años por irregularidades administrativas.

Las denuncias por corrupción son, entonces, el signo de la política de los años noventa (esto para no tratar los casos de otros países latinos, como Italia y España, o de las antípodas geográficas y culturales, como es el caso del corrupto gobierno japonés). En América Latina, la experiencia indica que en estos años, los presidentes que resultan involucrados en escándalos de corrupción durante el ejercicio de su poder salen muy mal librados; indica también que mientras exista una oposición (o alguna forma de expresión del descontento popular), hay posibilidades de cambios en las formas de hacer política. Fujimori en el Perú, y Causa Radical en Venezuela, pueden ser la señal de las formas futuras del quehacer político. Aun en Colombia, donde las expresiones de descontento han sido acalladas o son tan extremas que su accionar violento oculta los fines que se persiguen, es dicente el advenimiento de una nueva generación de hombres políticos (como los alcaldes cívicos), que son consecuencia del hastío de los políticos tradicionales, ante todo percibidos como *corruptos*.

La novedad de Colombia frente a los demás países de América Latina en su experiencia con la corrupción radica, eso sí, en dos factores: el primero es su estrecha vinculación con las poderosas mafias del narcotráfico. Éstas han llegado a corromper en tan alto grado los diferentes estamentos de la sociedad (el deporte, las finanzas, las instituciones...) que *limpiar* de dineros sucios los sectores implicados exige un esfuerzo tan grande como imaginar soluciones alternativas. La lucha contra el poder corruptor del narcotráfico es tan ardua, que más vale preguntarse ahora por estrategias diferentes a la profiláctica posición de saneamiento a cualquier costo: el reto, el real, está allí y no en la acumulación de decretos para atacar la corrupción, que siempre encuentra un resquicio por donde introducirse.

El segundo factor, muy ligado con el anterior, que diferencia la posición de Colombia de los demás países de América Latina, es su reciente tradición de violencia para solucionar sus conflictos. La desestabilización que puede producir la permanencia de un gobierno que para llegar a la jefatura del poder aceptó la financiación de los carteles de la droga es un dato menor frente a los altísimos niveles de violencia del país, este sí, problema percibido cotidianamente en las vidas de los colombianos. El *Proceso 8000*, en cierta medida, es la novela manejada por los medios en las horas de la no-

che. Pero la realidad -la dura, la violenta, la de la *limpieza social* de las noches bogotanas y los cuerpos encontrados en los ríos en el amanecer- ni siquiera merece ser destacada en la crónica amarilla de los periódicos. Los vaivenes del escándalo de corrupción de este gobierno tienden cada vez más a entrar dentro de la lógica violenta del país, que es la lógica de la confusión y la impunidad. El atentado al abogado defensor del presidente y la muerte de Álvaro Gómez por parte de quienes se llaman a sí mismos *Dignidad por Colombia*, antes que polarizar las fuerzas en dos bandos opuestos (a favor y en contra del presidente) embrollan y ensombrecen el desenlace de la historia. Frente al comportamiento de América Latina durante el inicio de los años 90, Colombia parece tener un libreto distinto (claro está que ningún otro país del continente tiene actores tan violentos como Colombia). Así las cosas, el mejor de los escenarios posibles es probablemente el de continuar los cambios en pequeña escala, atacando la corrupción de la clase política tradicional, aunque sin amenazar en su totalidad el precario orden que establece el protagonista central del episodio en que, para Colombia, confluyeron la corrupción y el narcotráfico en un momento dramático, que se inició en los albores de la década en Panamá.



El Observatorio del Narcotráfico recoge y analiza diferentes percepciones sobre los problemas relacionados con el mundo de las drogas, desde el cultivo de las plantas ilícitas hasta los usos y abusos de las sustancias psicoactivas. El Observatorio, consciente de que la multiplicidad de visiones sobre este asunto es la base para la discusión amplia del problema, quiere constituir un espacio de información y reflexión en donde las

contribuciones se hagan desde la experiencia diaria. Su contribución es importante para PANORAMA. Escribanos al Apartado Aéreo 59743 de Bogotá, o al e-mail iepri@hemerotecaides.gov.co